

# El programa económico del Gobierno de España

**Joaquín Arrieta**

EN LO QUE LLEVAMOS de año se han producido en España tres reformas supuestamente de gran calado: la reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones. Las tres se han hecho para incrementar el margen de beneficio neto de las empresas. Mediante la reforma laboral, se ha reducido el coste de contratación y el coste de despido de la mano de obra; mediante la reforma fiscal, se ha reducido el tipo del impuesto de sociedades, que pasa de ser uno de los más elevados de la UE a ser uno de los más reducidos. Mediante la reforma del sistema de pensiones se endurecen las condiciones de acceso al sistema de prestaciones y se compensa con un tiempo más largo de cotización por parte de los trabajadores la reducción de la recaudación fiscal procedente de los beneficios.

Todas y cada una de las reformas llevadas a cabo en este año, en su orientación general, y en sus principales contenidos, coinciden con las propuestas de la patronal CEOE, pero más aun, con el texto del Programa Nacional de Reformas (PNR), elaborado por el gobierno para adecuarse a la estrategia económica de la UE (el programa neoliberal de la denominada "Agenda de Lisboa") que, como señala el gobierno en la presentación del PNR, «constituye la referencia fundamental de la política económica del Gobierno a medio plazo». El estudio de este documento es imprescindible para entender la ideología económica del gobierno, de profundas raíces neoliberales.

## Los orígenes

El PSOE que llegó al gobierno central del Estado en unas circunstancias imprevistas, por lo tanto, sin una idea clara de cual tenía que ser la acción de gobierno, sólo tras año y medio de gestión, ha podido articular un programa de política económica, de la mano de la UE y su propuesta de reformas para hacer efectiva la Agenda de Lisboa.

Esta Agenda deriva de la constatación llevada a cabo por los jefes de gobierno de la UE, en el año 2000, de que la Unión Europea estaba inmersa en un proceso de competencia feroz con EE.UU. La Agenda pretendía mejorar la posición competitiva de la UE, superando a los USA en el terreno estratégico de la tecnología y el conocimiento, logrando por este medio mayores tasas de crecimiento económico y de creación de empleo.

Al margen de la más que dudosa relación que pueda haber entre el crecimiento del empleo y la inversión en tecnología, la admisión de la rivalidad entre las dos potencias del Atlántico Norte no se tradujo, sin embargo, en un programa de actuaciones coherente, y la Agenda de Lisboa fra-



María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno. Archivo

casó en su objetivo de convertir a Europa occidental en el líder del conocimiento mundial, en medio de un estancamiento económico en los principales países de la Unión, en particular Alemania. En lugar de sacar la consecuencia lógica –pero políticamente incompatible con la estrategia el gran capital– de que el crecimiento económico acelerado y la restricción fiscal son incompatibles en un contexto de elevado desempleo, o dicho de otro modo, que en el terreno de la política económica el fracaso deriva del Pacto de Estabilidad comunitario, los gobiernos decidieron revisar la Agenda de Lisboa en 2003 y lanzar dos años después una "Agenda de Lisboa renovada", que consiste esencialmente en darle una nueva vuelta de tuerca a la lógica neoliberal, y promover mayor desregulación y precariedad laboral, reducción del papel de lo público en el proceso de acumulación y reorientación de los magros recursos comunitarios, desde la producción material (agrícola) hacia la producción inmaterial (I+D). Y es en este carro que el gobierno español decide enganchar su carreta de medidas de política económica.

Primera constatación por tanto: la dependencia intelectual del gobierno se concreta en que su programa económico es la consecuencia de trasladar al contexto nacional las directrices de la CE. Se podría argumentar que puesto que el Estado español es miembro de la UE, es corresponsable de dichas directrices, negando así la tesis de la dependencia orgánica. Sin embargo, la capacidad de influencia de España en la UE es directamente proporcional al peso de las multinacionales españolas, por tanto muy reducido, y en consecuencia, las nuevas orientaciones estratégicas de la comunidad derivan del enfrentamiento y pacto de intereses entre los principales representantes del capital europeo (Gran Bretaña, Francia, Alemania u Holanda). El PNR se inicia con una declaración de fe: «el gobierno comparte plenamente la nueva concentración de objetivos de la Estrategia de Lisboa». ¿Qué persigue la Estrategia de Lisboa? Aumentar las tasas de crecimiento y crear más empleo. Dicho con palabras más normales y precisas, significan que la UE pretende lograr tasas de crecimiento económico del 3-4% al

año, y crear 18,9 millones de empleos (resultado de pasar en la UE25 de la tasa de ocupación actual del 63,8% al objetivo del 70% en 2010), mediante:

- un aumento en la inversión pública en I+D, especialmente en forma de ayudas a las empresas
- la reducción de otras formas de ayudas públicas y de la burocracia
- la implantación de la directiva Bolkestein de liberalización de servicios
- reduciendo las barreras a la importación (de productos europeos) en el tercer mundo y Japón
- moviendo a los profesores de universidad por Europa
- sustituyendo camioneros españoles, británicos y franceses por polacos
- controlando un poco más la inmigración
- y con algunas transferencias menores desde el estado hacia los perjudicados por la globalización para controlar su malestar

Y con este programa inane, el gobierno del PSOE está de acuerdo. Pero no sólo eso, sino que constituye el faro y guía de su programa de gobierno. El problema de la economía española, según el PSOE, es que el aumento de la ocupación vinculado a la inmigración se traduce en un uso extensivo de la fuerza de trabajo, que no se traduce en un aumento de la productividad, sino en todo lo contrario: al «percibir unos salarios inferiores a los de los trabajadores nacionales, abaratando el coste relativo del trabajo e induciendo la sustitución de capital». De modo que, según el PSOE, los inmigrantes, –que como sabemos se concentran en la agricultura, construcción y servicio doméstico–, serán responsables de que sus patronos compren menos tractores, menos encofradoras y menos lavadoras, y a causa de eso, la relación capital-trabajo estaría disminuyendo en España, y la productividad no mejoraría.

El absurdo diagnóstico les lleva al final a afirmar que el efecto de la inmigración sobre la productividad es en realidad ambiguo porque, por otro lado, como la fuerza de trabajo inmigrante es «más flexible» que la doméstica, favorece la adopción de nuevas tecnologías –es decir, el uso de capital–, «elevando la productividad de los factores y, por lo tanto, la productividad». O sea, que ya lo saben: la inmigración produce, al mismo tiempo, un aumento y una disminución en la composición técnica de la producción, eleva la productividad al mismo tiempo que la reduce. En este vaivén, no se sabe si la productividad finalmente sube, baja o se da vuelta de cabeza; lo único que está claro es que se reducen los salarios relativos de los trabajadores inmigrantes.

Este diagnóstico no sólo se da de patadas con los datos estadísticos, que muestran un importante crecimiento de la composición orgánica del capital en la industria (vale decir, de la relación capital-trabajo), sino que además refleja las dificultades de los ideólogos del gobierno para definir que es eso de la «productividad del trabajo» que en otro momento definen como «la eficiencia con que se utiliza ese factor productivo». Por otro lado, los objetivos que implican incre-

mento del gasto, esto es las inversiones en infraestructuras y en investigación, no se ven acompañadas de medidas para incrementar los ingresos. Si tenemos en cuenta además que el gobierno persiste en la política de reducción del déficit, ya puede suponerse el lector de donde van a venir los recursos para estas funciones de gasto prioritarias: de las partidas que no aparece como prioritarias en el programa. Así, tras el recorte en las pensiones, con medidas tan «progresistas» como reducir el número de viudas con derecho a pensión y el número de ciudadanos con derecho a cobrar las pensiones mínimas, el gobierno aspira a realizar economías en la Sanidad, y en vez de mejorar la cantidad y calidad del servicio, se apuesta por la «racionalización» del gasto sanitario que va a consistir en reducir las prestaciones farmacéuticas, los servicios médicos tecnológicos (diagnósticos y terapias) y un aumento de la productividad de los empleados del sistema nacional de salud.

Es increíble que un programa de este calado haya pasado desapercibido a la izquierda sindical y política que apoya al gobierno bajo el timorato argumento de que un gobierno del PP lo haría peor. Tal actitud sólo se explica por una cierta tradición existente en el movimiento sindical oficial que considera que en las políticas diseñadas por los gobiernos del PSOE, del dicho al hecho hay un gran trecho. Sin embargo, las reformas aplicadas en 2006 nos indican que al gobierno está dispuesto a cumplir su programa neoliberal a rajatabla. Y para facilitar el objetivo, va a modificar las alianzas en Cataluña, reforzando el flaco neoliberal con Convergencia i Unió, y desembarcando de la tripulación al sector populista de ERC e ICV –al menos a los primeros, que son los que cuentan–.

La mayor debilidad ante esta orientación neoliberal del programa real del gobierno, sin embargo, estriba en la ausencia de alternativa por parte de la izquierda. Una alternativa que para ser tal debiera ser creíble, en una doble dimensión: técnica –es decir, basada en un conocimiento real de los problemas de los trabajadores, de la economía española, del margen de manobra actual y potencial, esto es, del existente y del que se puede lograr «empujando»– pero también política, es decir, que concite una alianza de fuerzas suficientemente sólida como para que haya visos de que el programa alternativo puede llegar a convertirse en política de gobierno.

Mientras tanto, la pobreza masiva entre jóvenes y ancianos, la especulación inmobiliaria, el control parasitario de las rentas salariales por la banca, la incertidumbre y el riesgo creciente sobre los ciclos de vida de las familias trabajadoras, la pérdida de tejido y cultura industrial, la desamortización del sector público y la falta de participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones políticas, seguirán campando por sus respetos.

**Joaquín Arrieta** es profesor de economía en la UPV/EHU